

Certezas e incertidumbre

José Antonio y Miguel Ángel Herce
6 julio, 2022



Cuando todavía los datos de los registros administrativos laborales de alta frecuencia arrojan resultados que muchos analistas calificarían de satisfactorios, se cruzan en su camino otros datos económicos (inflación, tipos de interés) y datos de distinta naturaleza (encuestas sobre percepciones y expectativas) que anuncian una preocupante evolución de la economía.

Conviene decir que este escenario es compartido por multitud de países y que no hay nada en él que sea específico español, salvo la situación de partida de cada país y del nuestro en particular, sobre la que más adelante, si te parece incomparable gemelo, daremos alguna pincelada.

Salir de una severa recesión económica provocada por los confinamientos de personas y el parón de actividades económicas que impuso la Covid-19 en 2020 y 2021 no es una tarea sencilla. Y lo hemos descubierto entre sorpresas negativas y sorpresas positivas.

El año en el que estalló la pandemia en todos los países observamos cómo la actividad productiva descendió un 4,5% en la OCDE. Una tasa media de variación real del PIB que, sin embargo, oculta que Irlanda experimentó un crecimiento del 5,9% mientras que España sufrió una caída del 10,8%. Solo, además de Irlanda, Australia y Turquía experimentaron tasas de variación del PIB positivas en 2020.

En 2021, a pesar de las sucesivas oleadas de contagios, cuyos confinamientos fueron finalmente contenidos por la exitosa vacunación de la población, las economías de la OCDE se recuperaron, en

su conjunto, un 5,5%. España lo hizo en un 5,1% mientras que Irlanda creció un 13,5%. En 2021, por lo tanto, la economía española recuperó 4,6 puntos de los 10,8 perdidos en 2020¹.

El fuerte descalabro del PIB en la mayoría de las economías avanzadas y emergentes está todavía por recuperar en buena medida, a pesar del rebote de 2021. Basándonos en este único indicador, la recesión de 2020 fue equivalente a la «Gran Recesión» de 2009. Con dos importantes salvedades y, a su vez, lecciones aprendidas desde la crisis financiera: (i) muchos países se esmeraron en proteger a los trabajadores y pymes afectados por los confinamientos y (ii) desbordaron sus límites presupuestarios incurriendo en importantes aumentos de sus ratios de deuda.

La protección de los trabajadores, especialmente intensa en el caso de nuestro país, se llevó a cabo tempranamente a través del mecanismo de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) que evitaron que cuatro millones de trabajadores (abril 2020) pasasen a estar en una situación de desempleo efectivo, la mayoría de los cuales ya han recuperado su empleo o han pasado a otro empleo, pero no al paro según se desprende de los datos de la EPA. La tasa de paro aumentó durante la Covid de casi un 14% de la población activa a principios de 2020 al 16,3% en el verano de este mismo año. Y, a finales de 2021, se encontraba ya en el 13,3%, por debajo de la tasa de dos años antes.

No nos complace, obviamente, referir tasas de desempleo tan abultadas y, desgraciadamente, casi consustanciales con la economía española. Pero esos dos puntos y medio de aumento durante la Covid a los que nos referíamos representan apenas 1/5 de los millones de trabajadores adicionales que podrían haberse acumulado en las listas del desempleo durante la Covid en ausencia de los ERTE.

Desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021, los ERTE habían costado al Servicio Público del Empleo Estatal casi 18 millardos de euros, a los que hay que sumar el coste de las exoneraciones de cotización a la Seguridad Social que en el periodo citado supusieron otros 8 millardos de euros. Unos 26 millardos, en total. Una suma desorbitada, sin duda, que debe compararse con lo que hubieran costado las prestaciones por desempleo de los millones de trabajadores que en vez de quedarse en los ERTE transitoriamente habrían pasado al desempleo, quizá para permanecer en esta condición durante más tiempo.

Por el contrario, la protección a los pequeños negocios, empresas y a trabajadores autónomos, ha sido más dispersa, escasa y lenta de llegar a sus destinatarios. Una protección que ha consistido básicamente en préstamos bonificados y con la garantía del Instituto de Crédito Oficial. Tanto las bonificaciones como los avales han costado una fracción de los gastos asociados a los ERTE y, a diferencia de los asalariados que no han tenido que pagar cotizaciones a la Seguridad Social, los autónomos no han podido evitarlo, aunque careciesen de ingresos. Algo que ha sucedido siempre, pero que, en esta ocasión, ha neutralizado para la mayoría de autónomos las pequeñas ventanas de liquidez que han aportado los instrumentos antes mencionados.

El Ministerio de Economía y Transformación Digital estimaba a finales de abril de 2022 que los avales del ICO han alcanzado a unos 740 mil autónomos y pymes, que han obtenido financiación (que deben devolver) por importe de casi 140 millardos de euros. El coste de estos avales variará en función del importe, el plazo, pero no será superior al 1% del importe del préstamo, de forma que las ayudas

efectivas a las empresas y autónomos habrán costado bastante menos de millón y medio de euros, unas veinte veces menos que los ERTE.

La Covid-19 ha representado un enorme coste para la economía. El 10,8% de caída del PIB de 2020, equivale a unos 134 millardos de euros de renta nacional perdida por todos los factores de producción. Una parte muy importante de este descenso del PIB en 2020 equivale a impuestos y cotizaciones sociales no recaudados. Las ayudas de los ERTE han sido gastos por encima de los previstos, los gastos extraordinarios del sistema sanitario y asistencial han sido igualmente mil millonarios. De resultas de todo ello, la Deuda Pública española ha aumentado en 20 puntos porcentuales del PIB, más de 200 millardos de euros, equivalentes a la suma de los déficits generados en todo el periodo pandémico. Aquí caben todas las derivadas de ingreso y gasto público, claro, especialmente la largueza con la que se han extendido las redes de seguridad para millones de ciudadanos de todas las edades y condición tratando de incluir, en los amplios colectivos potencialmente beneficiados por las medidas, a los más vulnerables.

En este marco, generado básicamente en los largos meses que determinó una terrible pandemia, que se pudo afrontar con confianza una vez vacunada la población, las economías desarrolladas pudieron acelerar una cierta normalización ya en la primera mitad de 2021. La economía española afrontó este reto con adaptaciones en materia laboral, por las que millones de trabajadores salieron de los ERTE para reincorporarse al empleo efectivo, como se destacaba antes al mencionar que la tasa de paro desanduvo rápidamente el camino de la cima de abril de 2020.

La recuperación del empleo, que todavía daba muestras firmes en los datos conocidos este lunes pasado, acompañada de mejoras en la calidad de aquel (empleos indefinidos, básicamente), que todavía han de revelarse como mejoras estructurales y no meros efectos transitorios de las reformas laborales recientes, constituye otro de los contundentes datos que están caracterizando la salida de la Covid-19.

Datos, todos ellos, con luces y sombras, pero que, de no haberse cruzado con la secuencia que vamos a narrar a continuación, darían la impresión de que la economía española, poco productiva y aquejada de problemas de décadas que la política no ha sido capaz de resolver, estaba superando con relativo éxito la durísima prueba de la Covid-19.

La secuencia a la que nos referimos es una especie de «bajo continuo», grave como debe ser y disonante, desgraciadamente, de la melodía principal de salida de la Covid-19 experimentada hasta hace poco.

En la segunda mitad del año 2021 todos descubrimos los inesperados problemas de la ruptura de importantes cadenas de suministro globales, justo a medida que la demanda global se recuperaba de los confinamientos. Una demanda global que de ninguna manera superaba a la de la situación pre-pandémica, pero que aquí y allá presionaba fuertemente sobre una capacidad productiva y de encaminamiento global de la producción que, repentina e incomprensiblemente para muchos, estaba colapsada. En Europa, en ese mismo otoño pasado, las redes centro-orientales de gasoductos y materias primas energéticas presentaban problemas y rupturas que solo las mentes más calenturientas habrían atribuido a las intenciones secretas de Putin de invadir algún país de su órbita

geográfica. Los precios generales ya estaban subiendo en la OCDE en los últimos meses del año pasado, con un rumor sordo que, esta vez sí, llevó a muchos analistas a evocar episodios muy lejanos de crisis-energéticas-que-traen-inflación-y-estancamiento.

Y en la primera mitad de 2022, ya vencida, el tono dominante del marco económico global lo han dado las consecuencias económicas de la invasión de Rusia y la guerra de Ucrania. Inflación de dos dígitos, más persistente de lo que se pensaba, y escasez de materias primas alimentarias y energéticas, que ceban la inflación y el desabastecimiento en países ni beligerantes ni cercanos. Y, en estas, los Bancos Centrales más importantes del mundo empiezan a hablar de «subidas de tipos», que ya están aquí (los EE. UU.) o a la vuelta de la esquina (Euro Zona).

Si todavía escuchamos mensajes oficiales de que el empleo va muy bien, que lo va, dentro del régimen de paro masivo y empleo poco productivo en el que funciona el mercado de trabajo español, ya empezamos a escuchar avisos acerca de los trimestres difíciles y complejos que nos esperan. Especialmente porque estamos sentados en una montaña de deuda, cuyo coste de servicio (intereses) va a aumentar.

El bajo continuo de los acontecimientos de fondo de los muchos meses transcurridos desde que se acabó el verano del año pasado ha terminado por imponer una perspectiva para la que hay que prepararse, porque no nos acompañan demasiadas virtudes estructurales. Por buenos que sigan siendo algunos datos (afiliación, reservas veraniegas), ya se han instalado en nuestra mente algunas palabras y expresiones que reflejan que la partitura ha cambiado, como inflación, subidas de tipos y recesión. Las certezas han dado paso a una descomunal incertidumbre ante lo que vendrá después del verano. Mala cosa.

¹. El crecimiento del 5,1% en 2021 se produjo sobre una base menor que la base sobre la que se perdió el 10,8% de 2020. Al traducir las tasas de variación en puntos efectivos del PIB deben compararse los 10,8 puntos efectivos que se perdieron en 2020 con los 4,55 puntos efectivos que se recuperan en 2021 gracias al crecimiento en un 5,1% de una base un 10,8% menor.